

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 10, capítulo CLXXIV

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
Carlos Sánchez Silva

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 10, capítulo CLXXIV

**Anotado y revisado por
Carlos Sánchez Silva
(UABJO)**

**con la colaboración de
Maira Cristina Córdova Aguilar**

Capítulo CLXXIV

**El gobierno nacional refuta
razonablemente a González Ortega**

Abril de 1866

CAPÍTULO CLXXIV

EL GOBIERNO NACIONAL REFUTA RAZONADAMENTE A GONZÁLEZ ORTEGA

Abril de 1866

Con muy buen juicio, el gobierno republicano resolvió divulgar una muy larga circular fechada el 30 de abril y suscrita por Sebastián Lerdo de Tejada, dirigida a los gobernadores de los estados, contestando la protesta y el manifiesto lanzados por el general González Ortega con motivo de la expedición de los decretos de 8 de noviembre de 1865 relativos a la prórroga del período ordinario de las funciones del Presidente de la República y de las responsabilidades que, a juicio del gobierno, habían recaído en su contra.

Hemos creído conveniente reproducir este documento, pese a su gran extensión, porque es poco conocido; incluso obras especializadas reproducen fragmentos y párrafos que inducen a caer en confusiones y hasta alteraciones de su contenido real.

El propio licenciado José González Ortega, nieto del prócer zacatecano, en la obra que publicó para tratar de reivindicar la memoria de su abuelo, ni siquiera menciona este documento.

Es un alegato cuidadosamente redactado, seguramente escrito por Lerdo de Tejada, en el que con gran acopio de información se refutan las apreciaciones del Gral. González Ortega y se lleva, a lo largo de la exposición, un orden lógico.

Desde sus primeros párrafos llama la atención el hecho de que el gobierno no haya recibido aún los documentos originales producidos por el Gral. González Ortega, sobre todo la protesta, pese a que viene dirigida a Lerdo de Tejada; pero dado que se han divulgado ampliamente, pues

incluso circulan ya en forma impresa, el gobierno ha considerado conveniente darse por enterado.

Esta circular nos permitió aclarar algo, que nos preocupó al preparar el volumen correspondiente al sitio de Puebla, y fue el no haber podido localizar en el archivo de la Secretaría de la Defensa el "Parte general de las operaciones militares en la defensa de Puebla", por lo que tuvimos que recurrir a la publicación de ese documento que el Gral. González Ortega hizo en Zacatecas.

Lerdo de Tejada hace notar que, a pesar de que el mencionado parte está dirigido al ministro de Guerra, cargo desempeñado en ese momento por el Gral. Ignacio Comonfort, el original del mismo nunca llegó a sus manos, quien lo estaba esperando con el objeto de "rectificar algunas inexactitudes que notó". Murió el Gral. Comonfort y el original del parte no llegó a ser entregado al gobierno.

Sugerimos al lector que, pese a la gran extensión del documento, dedique su atención al mismo, por tratarse de la discusión de uno de los más importantes temas de controversia en relación con la personalidad del presidente Juárez, durante la lucha contra la intervención. Para poder hacer un examen juicioso de esta cuestión, recomendamos al lector lea también con atención y cuidado la protesta del Gral. González Ortega, firmada el 21 de diciembre de 1865 en el Paso del Águila,¹ y el manifiesto suscrito en San Antonio de Béjar el 26 de ese mismo mes.²

Sin embargo, nos parece conveniente destacar el hecho de que en un problema de tanta importancia y pese a que para esas fechas, abril de 1866, estaba prácticamente resuelto desde el punto de vista militar, pues ya se había obtenido la adhesión de la totalidad de los jefes con mando de fuerza, el gobierno republicano consideró conveniente dar satisfacción a la opinión pública y explicar, en forma más amplia, la trascendental decisión de prorrogar el período de Juárez y a la vez sujetar a juicio al Gral. González Ortega.

¹ Documento 17, capítulo CLVIII de este tomo.

² Documento 18, capítulo CLVIII de este tomo.

Asomémonos ahora al mundo de los mexicanos en el exilio radicados en Nueva York y en Washington, a donde había regresado el Gral. González Ortega, después de su visita al estado de Texas.

Francisco Zarco, desde Nueva York, escribe una afectuosa carta a Juárez comunicándole la publicación de los apuntes biográficos que de él preparó. Pese a nuestra búsqueda en los periódicos de Nueva York de la época, no hemos podido localizar esta importante colaboración de Zarco, pero no desistimos de lograrlo algún día.

Comenta también, en forma desfavorable, las actuaciones públicas de González Ortega y, usando un giro de lenguaje de la época, afirma: "Mientras más escriba (González) Ortega, más se desconceptuará".

En contraste con lo anterior, reproducimos carta del Gral. González Ortega a Negrete, que se encuentra en Brownsville. Se muestra muy discreto sobre sus planes y, comentando la correspondencia diplomática que el gobierno de los Estados Unidos ha dado a conocer, considera que el imperio de Maximiliano se acabó, agrega "sólo quedan grandes cuestiones que resolver".

Los exiliados de Nueva York que siguen a González Ortega muestran gran actividad, por lo que Juan Baz considera conveniente informar al gobierno y envía a Juárez una amplia carta, en la que también comenta, con gusto, la actitud diplomática de los Estados Unidos.

Definido ya francamente a favor de González Ortega, el Gral. Epitacio Huerta escribe a fines de abril, desde Nueva York, a Negrete, informándole de las adhesiones que ha recibido González Ortega en su lucha por asumir la Presidencia de la República. Realmente son muy optimistas sus apreciaciones, pero lo más importante es que apunta la decisión de González Ortega de internarse en el territorio nacional. Huerta lo acompañará en su intento y espera darle pronto un abrazo a Negrete, ya que seguramente se incorporará a sus filas.

DOCUMENTOS

Abril de 1866

CIRCULAR SOBRE LA PRÓRROGA

Ciudadano gobernador del estado de...

Con motivo de los dos decretos que comuniqué a usted en 8 de noviembre último, relativo uno a la prórroga del período ordinario de las funciones del Presidente de la República, conforme al espíritu y letra de las prevenciones de la constitución, mientras el estado de la guerra no permita hacer nueva elección constitucional y relativo el otro a las responsabilidades del ciudadano Gral. Jesús González Ortega, ha publicado éste una protesta dirigida al que suscribe y un manifiesto a la Nación.

La protesta aparece firmada el día 21 de diciembre en el Paso del Águila, del estado de Texas y el manifiesto aparece firmado el 26 de aquel mes en San Antonio de Béjar, ciudad del mismo estado de Texas, de los Estados Unidos de América. El Gral. (González) Ortega estaba permaneciendo en aquel país, hacía ya entonces cerca de un año, sin licencia ni comisión del gobierno, mientras los buenos ciudadanos de la República seguían y siguen defendiendo en ella su independencia e instituciones contra la invasión extranjera.

No he recibido la protesta, teniendo conocimiento de ella y del manifiesto, por los ejemplares impresos que hace poco han venido a algunas personas privadas. Sin embargo, para ocuparme del asunto, no esperaré más recibir la protesta, porque ya sucedió en San Luis Potosí, en octubre de 1863, que deseando el Gral. Comonfort, ministro de Guerra, rectificar algunas inexactitudes que notó en un impreso publicado con el carácter de parte general de las operaciones militares en la defensa de Puebla, esperó en vano, algunos días antes de que muriese a manos del enemigo, recibir oficialmente dicho parte general, mandado imprimir entonces por el Gral. (González) Ortega en Zacatecas, que aparecía

dirigido al ministerio de Guerra y que nunca llegó a ser recibido por el gobierno.

El Gral. (González) Ortega no pudo impugnar en su protesta ni en su manifiesto, todos los fundamentos consignados en los dos decretos y en la circular con que se acompañaron. Para excusarse de impugnarlos, afectó tener en poco tales fundamentos. Se limitó a decir que con esto se había querido "dar a la nación una cátedra de lógica y una explicación de nuestro derecho constitucional" y agregó que, "a estos medios, débiles en verdad, tiene que recurrirse siempre que faltan principios legales y razones sólidas en que apoyarse". Ciertamente, que sólo a falta de un medio mejor para evadir la dificultad, pudo el ciudadano Gral. Ortega querer que no deban examinarse lógicamente las razones de un asunto y pretender que los principios legales para aplicar los preceptos de la constitución pudieran ser diversos y extraños a nuestro derecho constitucional.

Evadiéndose así, de tratar lo único que se debía considerar al ocuparse de unos decretos sobre puntos constitucionales, añadió que "a él sólo le tocaba, por ahora, narrar lo que está colocado en la esfera de los hechos". Esto es, siendo difícil ocultar la razón, desfigurar los preceptos de la constitución e inventar preceptos que no contiene, estimó más fácil ocultar unos hechos, desfigurar algunos otros, suponer otros diversos, para que si su manifiesto no podía ser un documento razonado, al menos satisficiera su pasión, siendo, como es, un libelo infamatorio y calumnioso.

Mi objeto en esta circular es sólo rectificar lo que el Gral. (González) Ortega ha dicho acerca de algunos actos públicos y oficiales que ha desfigurado para presentarlos bajo un aspecto ajeno a la verdad. Con esto podrá juzgarse de lo demás que quiso escribir en el manifiesto, como puede hacerlo siempre el que se propone escribir un libelo, calumniando los actos y las intenciones privadas. El gobierno debe abstenerse de descender a este terreno, al que el Gral. Ortega no se ha retraído de bajar ni por lo que interesaba a su propio decoro, ni por lo que correspondía al decoro del gobierno que, a pesar de la desgracia, ha

estado representando la causa de su patria, ni por los justos miramientos debidos a la condición actual de la República.

Afectó que nada más referiría hechos y que no quería contestar los fundamentos de los decretos; pero, conociendo que con esto a nadie podría satisfacer, quiso, en la parte que creyó posible, contestar algunos de un modo indirecto, entre las declamaciones del manifiesto. Acerca del primer decreto, relativo a la prórroga del período de las funciones del presidente, no contiene el manifiesto sino una sola observación.

Pidió el Gral. (González) Ortega en la ciudad de Chihuahua, el día 30 de noviembre de 1864, que el presidente le hiciese entrega del gobierno. Alegó que, para el caso de elección hecha fuera de la época ordinaria, el artículo 80 de la constitución fijó como término del período de cuatro años "el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de la elección". Según esto, elegido el presidente en 1861 y habiendo tomado posesión en 15 de junio de aquel año, pensaba el Gral. Ortega que el año 1864 era el cuarto siguiente al de la elección.

Entre otros fundamentos de la respuesta, que le di entonces, le hice presente que, como un año no puede ser siguiente a sí mismo, era bien claro que el año 1862 había sido el primero siguiente al de 1861 y que, de éste modo, el año 1864 no era el cuarto, sino el tercero siguiente al de la elección. En tal virtud, le dije, el término del período del presidente no es sino el 30 de noviembre del año 1865, conforme al evidente tenor literal del artículo 80 de la constitución.

El Gral. (González) Ortega ha citado ahora en su manifiesto estas palabras, figurándose poder presentarlas como una contradicción del gobierno, con el hecho posterior de haber declarado la prórroga. Sin impugnar los motivos y fundamentos de ésta, ha querido presentar como contradictorio el haberse dicho antes cuál debía ser el término ordinario del período, en circunstancias comunes y el haber declarado después que, en las actuales circunstancias, debía prorrogarse el período ordinario, conforme a la misma constitución, mientras el estado de la guerra no permite hacer nueva elección constitucional.

Su observación se desvanece por el simple sentido de sus palabras. Una prórroga es la ampliación o extensión fuera del límite o término de

alguna cosa. La idea de prórroga no incluye sino que, por el contrario, supone necesariamente la idea anterior de un término; pues no necesita prorrogarse, sino lo que en algún caso debe existir fuera de su término ordinario común.

La resolución de 30 de noviembre de 1864, que expresó cuál era el término del período ordinario del presidente, distó tanto de envolver algún concepto de que no fuese posible prorrogarlo, que en ella misma se previó y se consideró expresamente el caso en que la prórroga podría ser debida y necesaria. Referí en aquella resolución las observaciones expuestas al gobierno por muchos funcionarios públicos, sobre "que debieran considerarse prorrogados los poderes y la autoridad del actual ciudadano presidente, por todo el término necesario fuera de su período constitucional si, en el tiempo en que debiera elegirse nuevo presidente, la situación extraordinaria, causada por la guerra extranjera, hacía imposible que se verificase constitucionalmente la elección". Precisamente, para evitar que, llegado el caso, pudieran algunos suponer de buena fe que había poca consecuencia en los actos del gobierno, expuse sustancialmente en aquella resolución, casi sin exceptuar uno solo, todos los fundamentos en que se apoyó después el decreto de 8 de noviembre último, por el que se declaró que había llegado el caso de ser necesaria la prórroga.

Entonces sólo tocaba resolver cuál sería el término del período ordinario. El gobierno no podía ni debía anticipar otras resoluciones, que dependían de eventualidades futuras en la condición de la guerra y de si fuera posible o imposible hacer la nueva elección en el tiempo regular. Por estos motivos que cuidé de expresar, concluí diciendo, entonces, que el gobierno reservaba declarar oportunamente en juicio sobre el punto de la prórroga, "supuesto que aún no había llegado el tiempo en que debieran verificarse las elecciones, ni había llegado el caso de ver si entonces el estado de la guerra impidiera verificarlas, ni se debía, por esto, anticipar la previsión de todas las circunstancias que hubieran podido ocurrir, cuando ya fuera necesario proceder en ese punto, del modo que fuese más arreglado a la letra y al espíritu de nuestras instituciones".

Nada más para los que no leyese la resolución de 30 de noviembre de 1864, ni el decreto de 8 de noviembre de 1865, ha podido escribirse en el manifiesto del Gral. (González) Ortega, que hubiera poca consecuencia entre esos dos actos del gobierno. Para decirlo así, sería necesario borrar lo que consta publicado en documentos oficiales. Este es uno de los varios rasgos que por sí solos descubren el espíritu con que ha sido escrito el manifiesto.

Desde la primera fecha vio el Gral. (González) Ortega en aquella comunicación, que fue dirigida a él mismo, cuáles eran los principios sobre el punto de la prórroga, que el gobierno manifestó claramente tener ya en consideración. Entonces no protestó el Gral. Ortega, ni dijo una palabra para hacer contra esto objeción alguna.

Tampoco protestó, ni opuso ninguna objeción, respecto de que en aquella vez no se le hiciese entrega del gobierno. Por el contrario, en la comunicación con que pidió que se le entregase, expresó saber ya desde antes la opinión del gobierno sobre que todavía faltaba un año para el término del período ordinario del presidente. Expresó, también, que se conformaría con lo que se resolviera, pues su único objeto era salvar su responsabilidad. De esta manera demostró que entonces no tenía empeño de recibir el gobierno, sino que más bien quería quedar libre de compromisos, llenando una formalidad.

Dijo que, a su juicio, no faltaba un año, sino que había llegado ya el término del período. Citó varios artículos constitucionales en apoyo de ese concepto, expresando que "nuestro pacto político lo dejó consignado en preceptos bien claros". Añadió, que "elegido Presidente de la Corte de Justicia por el voto de los pueblos, única fuente de autoridad entre nosotros, sería el que remplazase al actual supremo magistrado en el ejercicio de sus espinosas y difíciles tareas, caso de separarse del mando y que, para llenar en esa parte el deber que le imponía el honor, la consigna de la ley y el voto nacional, sólo esperaría el 1º del mes de diciembre si otras razones no lo obligasen a dirigir su comunicación en la víspera de aquel día".

Las otras razones, consideradas entonces por el Gral. (González) Ortega, como superiores a los preceptos que creía bien claros de la

constitución y al deber que a su juicio le imponía el honor, la consigna de la ley y el voto nacional, eran alejar todo motivo de discordia, para "evitar males que pudieran sobrevenir con deshonra de su patria, atendidas las circunstancias actuales y afianzar el poder, si esto era posible, en las manos del que debía ejercerlo". Además, pesando en aquel tiempo las desgracias y los reveses de la República, la última razón, el último pensamiento con que el Gral. Ortega terminó su comunicación, fue el deseo de que "si México tiene que sucumbir en la lucha que sostiene contra la Francia y contra algunos malos mexicanos, lo haga hundiéndose honrosamente con su bandera, sin dejar tras de sí el amargo recuerdo de que la desgracia y los reveses de la fortuna, fueron capaces de introducir la división entre los defensores de sus derechos".

Antes, en noviembre de 1864, acababa de sufrirse el desastre de Majoma; el gobierno había tenido que venir hasta el estado de Chihuahua y era cuando parecía más libre de embarazos y más fuerte la intervención extranjera. En el exterior, aún no se había producido alguna causa que opusiese grave dificultad a la permanencia de la intervención. En el interior, los que no tuviesen muy sólida fe en el triunfo final de la República, podían preocuparse con el pensamiento de que llegase a sucumbir por sus desgracias y sus reveses. Viendo que era cuando parecía menor el número de sus defensores, podían temer que, en vez de sostenerse y aumentarse, se disminuyeran más cada día.

Ahora, en diciembre de 1865, aun los que antes hubiesen dejado de tener bastante fe, podían ver ya con más confianza el porvenir de la República. En el exterior, había terminado la guerra civil de los Estados Unidos; base única que tuvo el gobierno francés para concebir su efímero proyecto de una intervención europea y monárquica en México. En el interior, el transcurso de otro año había traído nuevas pruebas de que no podría durar mucho el pretendido gobierno hijo de la intervención, mal visto por todos los mexicanos, hasta por los pocos que primero lo desearon; rodeado sólo de unos cuantos parásitos, sin ninguna fuerza propia y sin recursos ni posibilidad de crédito para satisfacer su desenfrenada avidez de lucro y seguir pagando cómplices con sus gastos insensatos. La lucha de un año más había presentado mil nuevas pruebas

de que los buenos ciudadanos no hacían cálculos de tiempos ni se excusaban por la falta de elementos; que su patriotismo era superior a las desgracias; que con sólo su valor podían adquirirse algunos triunfos para compensar los reveses y que, en lugar de disminuirse, se aumentaban siempre el número de los heroicos defensores de la República.

Antes, en noviembre de 1864, el Gral. (González) Ortega no protestó contra lo comunicado entonces a él mismo, sobre los motivos y fundamentos que había para poderse decretar la prórroga cuando llegase el caso. Pidió entonces la entrega del gobierno diciendo que ya sabía y que se conformaría con la resolución de no entregárselo. Cuidó de advertir, que prescindiría de los preceptos de la constitución, que creía bien claros y del deber que pensaba le imponía el honor, la consigna de la ley y el voto nacional, porque entonces consideraba como deberes superiores no introducir ninguna división entre los defensores de la República, no causar así males que pudieran sobrevenir con deshonor de su patria y afianzar el poder, si era posible, en las manos del que debía ejercerlo. Con esto se refirió al ciudadano presidente, a quien llamaba en su comunicación "el hombre que tan honrosamente ha conservado el depósito de la ley". En seguida manifestó que quería ir a combatir en el interior de la República; alegó motivos de seguridad personal, por los que podría convenir que no fuese directamente como iban otros al interior; pidió permiso para poder atravesar en su camino por el mar o por país extraño; se le concedió así el permiso con expresa calidad de poder tan sólo pasar de tránsito por el extranjero; aceptó el permiso en estos términos para salir desde luego de la República y, una vez salido de ella, fue a quedarse permaneciendo en el exterior, sin licencia ni comisión.

Ahora, en diciembre de 1865, el Gral. (González) Ortega se ha acercado a la frontera de México; ha publicado, para calumniar al gobierno, una protesta y un manifiesto, cuyos objetos estaban ya calificados por él mismo en sus palabras que acabo de citar; ha estado cosa de dos meses en la frontera dentro del territorio de los Estados Unidos, hasta persuadirse de que los defensores de la República no apoyaban sus pretensiones y ha vuelto después a Nueva York para seguir residiendo en el extranjero.

Por haber antes permanecido allí cerca de un año sin licencia ni comisión, con abandono del cargo de Presidente de la Corte de Justicia y abandonando, también como general, la causa de la República y sus banderas, se declaró en el segundo decreto de 8 de noviembre, que cuando se presentase en el territorio de la República debería someterse al juicio respectivo. No pudiendo negar el Gral. (González) Ortega que había estado sin licencia en el exterior, pretendió excusarse en su manifiesto con (el) hecho de haber escrito una carta privada al presidente en 8 de mayo de 1865, indicando que el gobierno podía encargarle que allá desempeñase alguna comisión.

Ha referido que, para enviar su carta al presidente, la recomendó a una persona que residía en Chihuahua, para que se le entregase y le pidiera su resolución. Ha dicho, también, que recibió en respuesta dos cartas, una a principios de agosto, en que dicha persona le daba esperanzas de que se le conferiría la comisión y otra por el correo siguiente en que le explicaba que el gobierno había pensado no conferírsela. En efecto, cuando el presidente recibió la carta, lo manifestó así al encargado de entregársela. Sabía bien el Gral. (González), Ortega que no podía el gobierno querer darle una comisión en el exterior; ya porque teniendo el carácter de Presidente de la Corte para que en caso de faltar el Presidente de la República pudiera substituirlo, su más estrecho deber era estar dentro del territorio nacional; ya porque cuando dijo que quería ir a combatir en el interior, solicitó por motivos de seguridad personal que se le permitiera pasar por el extranjero, lo que el gobierno le concedió con expresa calidad de que tan sólo fuera de tránsito y ya porque debía conocer bien lo inoportuno de que el gobierno complicase con nuevas comisiones en el exterior las anteriores que estaban pendientes.

Según lo que el Gral. (González) Ortega expuso en el manifiesto sobre la dilación ordinaria del correo, explicando que su carta debía tardar cerca de mes y medio o más para llegar a Chihuahua, no pudo recibirse allí sino a fines de junio o principios de julio. En esos mismos días regresó a Chihuahua la malograda expedición que el Gral. Negrete llevó a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, teniendo el gobierno que

ocuparse de todos los incidentes y de todas las atenciones que ocasionó su regreso. A la vez, avanzó sobre Chihuahua la expedición francesa del Gral. Brincourt, en número superior al de la fuerza que se le podía oponer. También fue necesario ocuparse, en los mismos días, de los dos cambios que ocurrieron en el gobierno particular del estado de Chihuahua.

El presidente salió de la capital del estado el día 5 de agosto, para venir al Paso del Norte y, a poco de haber llegado aquí, escribió al Gral. (González) Ortega el día 7 de septiembre no habiéndole escrito antes, por las constantes atenciones de los días que precedieron a la salida de Chihuahua y por el viaje a este lugar. Le escribió por un acto de cortesía, para no dejar sin una respuesta directa su carta de 8 de mayo y no por estimar necesario contestarla, pues en cuanto al objeto de ella ya había contestado desde que la recibió, por conducto de la persona que estuvo encargada de entregársela y de hablarle sobre el asunto. Creyéndolo conveniente para la excusa que alegaba, ha dicho el Gral. Ortega que no recibió la respuesta del presidente; pero ha confesado que desde principios de agosto recibió la primera carta de la persona a quien recomendó la suya y que por el correo siguiente recibió la segunda carta del mismo manifestándole que no pensaba el gobierno conferirle la comisión.

Para contestar el cargo de haberse quedado permaneciendo por su voluntad en el extranjero, no ha podido el Gral. (González) Ortega encontrar más excusa que otro acto de su exclusiva voluntad, como fue su carta de 8 de mayo, con la que quiso obtener un medio de quedarse allí. Ha revelado su pensamiento de entonces, con su conducta posterior. Si no se le daba la comisión, como bien debía preverlo, al menos tendría tres meses, o más tiempo, para esperar la respuesta, según ha explicado en su manifiesto. Para después, le quedaría el medio, que ha empleado, de inspirar dudas infundadas sobre la conveniencia de los objetos de la petición, sobre la forma en que quiso hacerla y sobre la fecha y términos de la respuesta.

Careciendo de otra excusa no se ha detenido ante la obvia consideración, de que nunca podría excusarse justamente, por sólo

haberle ocurrido a tanta distancia la idea de hacer una solicitud. Es regla elemental y muy sabida, la de que nadie puede suspender el cumplimiento de sus deberes, por el simple hecho de que le ocurra solicitar otra cosa. Estaría en el arbitrio de cualquiera faltar impunemente a sus deberes, si pudiera abandonar o suspender el cumplimiento de ellos, antes de obtener una concesión que lo autorizase al efecto y sólo por el simple hecho de haberla solicitado.

Hubo también en este caso la circunstancia de que la petición se redujo a expresar un deseo en una carta privada. Sobre esta circunstancia, explicó el Gral. (González) Ortega en el manifiesto, que, a su juicio, importaba poco la forma oficial o de carta privada; pero había opinado de diverso modo, cuando solicitó el permiso de que le ocurrió valerse para ir al extranjero. Entonces sí quiso tener la formalidad y la seguridad oficial y entonces sí pensó, como lo sabe todo el mundo, que los negocios públicos no deben tratarse con el presidente, sino con el ministro respectivo. Además de una carta dirigida en aquella ocasión al presidente, la cual cita en el manifiesto, dirigió a la vez al ministro del ramo un oficio, que cita también y que se publicó juntamente con el decreto.

Para alegar el Gral. (González) Ortega aquella excusa, incurrió en una de las numerosas y palpables contradicciones que se notan a cada paso en su manifiesto.

Con todo lo que refirió en el mismo, se propuso demostrar: que el gobierno tenía una antigua prevención contra él; que desde hace tiempo había buscado motivos para privarlo del carácter de Presidente de la Corte de Justicia y que había empleado medios indirectos para dificultar sus servicios, o para colocarlo en circunstancias de que perdiera o se disminuyera su prestigio. Como una prueba de la prevención del gobierno, analizó en el manifiesto los términos de la autorización que se le concedió en Chihuahua, el 30 de diciembre de 1864, para que fuese a combatir al enemigo en el interior de la República.

Él pidió con ese objeto una simple licencia y ha dicho en el manifiesto que se hubiera contentado con un simple pasaporte, para poder ir a valerse de la influencia que le daban sus servicios. En lugar de

que el gobierno le concediera menos, le concedió más de lo que había pedido. No sólo le dio la licencia que necesitaba como Presidente de la Corte y como general, sino que le concedió una autorización para levantar las fuerzas que pudiera en el interior.

Se expresó en la autorización, que para las operaciones militares debería obrar en combinación con los gobernadores y jefes de las fuerzas republicanas, dejando expedita la acción de las autoridades legítimas. Esta prevención se ha puesto de ordinario, según es regular y debido, en las autorizaciones semejantes, sin que a nadie le hubiera ocurrido estimarla como una restricción perjudicial. Ella no sería aplicable, cuando el jefe autorizado pudiese ir a lugares donde no existieran autoridades o jefes superiores; siendo sólo aplicable y necesaria en caso contrario. No podría ser que el gobierno autorizase vaga y ciegamente a un jefe, para que a su arbitrio obrase en desacuerdo o enervase la acción de las autoridades y jefe nacionales, en los mismos lugares donde ya estuvieran combatiendo dignamente al enemigo.

Sin embargo, acumulando quejas el Gral. (González) Ortega en su manifiesto, porque no se le había autorizado para tanto, creyó posible deducir unas consecuencias que bastará citar, pues se califican por sí solas.

Esto es, dijo, el gobierno me prevenía que no hiciera cosa alguna en defensa de la nación; porque perdido como teníamos el estado de Zacatecas, ¿qué fuerzas iba a levantar?, ¿en qué puntos podía hacerlo?, ¿de qué recursos iba a disponer?, ¿con qué facultades podía proporcionárselos?" Luego agregó: "No me desalenté por aquella disposición del Ejecutivo. No me era extraña; la esperaba ya. Recordaba hechos recientes, hechos en que se me habían presentado toda clase de dificultades.

Seguramente, al deducir estas consecuencias, no advirtió que por ellas se podía juzgar de su viaje al exterior y que con ellas contradecía y desvanecía del todo la excusa de haber pedido desde allá, en una carta privada, que se le encargase desempeñar allá mismo alguna comisión.

No calificaré lo que el deber y el honor pudieran aconsejar a un general, si, al recibir una autorización como aquélla, creía que, en vez de servirle, le impedía ir a combatir al invasor de su patria. Teniendo tal creencia, habría sido fácil exponerla al gobierno en términos convenientes. Un general es un empleado público, que sólo puede conservar dignamente su empleo, mientras lo crea compatible con su honor y con el cumplimiento de sus deberes. La falta sería del gobierno, si no lo ocupase cuando tuviera oportunidad; pero mientras no sea ocupado, un general cumple su deber con estar siempre pronto y dispuesto a que se le ocupe. Parece fácil conocer lo que debe hacer un general, si no quiere esperar a que el gobierno califique la oportunidad de ocuparlo, o si llega hasta creer que se le veja o ultraja en sus derechos de ciudadano, o en su honor militar.

El Sr. Gral. (González) Ortega vio dos conceptos en la autorización que se le dio el 30 de diciembre de 1864. Uno, para que fuese a combatir al enemigo en el interior y el otro para que, con ese preciso fin, pudiera pasar tan sólo de tránsito por el exterior. Él había pedido las dos cosas y demostró, con su conducta posterior, cuál de ellas había sido su secreto y verdadero fin principal. Ha dicho en el manifiesto, cómo calificó la autorización y cómo juzgó que absolutamente le impedía ir a combatir al enemigo; pero en vez de representarlo así, con franca rectitud o de renunciar la autorización si no la creía útil, se valió de ella para ir desde luego, no de tránsito, sino a permanecer voluntariamente durante la guerra en el exterior.

Para que el Sr. Gral. (González) Ortega hubiese marchado con un propósito leal de pasar sólo de tránsito por el extranjero, habría necesitado pensar que pudiera desde allí dirigirse desde luego al interior de la República. En tal caso, no sería exacto que hubiese creído lo que ha dicho en el manifiesto, sobre que la autorización le impedía hacerlo. Si creyó que se lo impedía, como lo ha dicho, no pudo marchar con un propósito leal de pasar de tránsito, sino con el secreto y verdadero propósito de quedarse, como se quedó, permaneciendo en el extranjero.

Igualmente, para que el Sr. Gral. (González) Ortega hubiese podido escribir al presidente su carta de 8 de mayo, con un objeto

leal de que se le confiriese algún encargo en el extranjero, habría necesitado pensar que el gobierno pudiese tener buena disposición para conferírsele. En ese caso, no sería exacto que hubiese creído lo que ha dicho en el manifiesto, sobre que el gobierno tenía una antigua y constante prevención en su contra; sobre que él ya no la extrañaba, sino que esperaba verla en todos sus actos y sobre que recordaba hechos recientes, en que, a su juicio, se había querido oponerle toda clase de dificultades. Si pensaba todo esto como lo ha dicho, no pudo escribir su carta con el objeto leal de obtener tal encargo, sino que al escribirla desde tanta distancia y al calcular que la respuesta tardaría tres meses o más, debió pensar que el único efecto de su carta sería el transcurso de largo tiempo, en que no cumpliría su deber de ir a combatir al enemigo. Así es que, debió pensar y creer, que el único efecto verdadero de su carta sería quedarse mientras le conviniera, permaneciendo voluntariamente en el extranjero durante la guerra, con abandono del cargo de Presidente de la Corte de Justicia y haciendo también como general abandono del ejército, de sus banderas y de la causa de la República.

Acerca del decreto en que se declaró que cuando se presente en el territorio nacional deberá someterse al juicio respectivo, se ve en el manifiesto que consideró su carta al presidente, como el principal medio que creía tener para su defensa. Sin embargo, indicó además otros tres, aunque no trató de demostrar sus fundamentos.

Uno se refirió a que, en las amplísimas facultades delegadas al presidente por el Congreso, se puso la restricción de que no pudiera contrariar las prevenciones de la constitución sobre responsabilidad de los funcionarios públicos. Según esas prevenciones, el Congreso es quien debe declarar si hay mérito para que se proceda a hacer efectiva la responsabilidad. Delegadas al presidente con la mayor amplitud todas las facultades del Congreso para poder legislar y hacer cuanto podría hacer él mismo, es fuera de duda, que el presidente ha podido y puede, en lugar del Congreso, hacer las mismas declaraciones que él podría hacer sobre la responsabilidad de un funcionario público.

En el caso del Sr. Gral. (González) Ortega, el gobierno, lejos de contrariar, se ha conformado estrictamente con las reglas puestas en las prevenciones relativas de la constitución. Según su artículo 105, respecto de la falta oficial por abandono del cargo de Presidente de la Corte, el Congreso podría declarar la culpabilidad, para que luego el tribunal competente designase la pena. El gobierno se abstuvo de declarar la culpabilidad limitándose a resolver que cuando el Sr. Gral. Ortega se presente en el territorio de la República, se dispondrá lo conveniente para que se proceda al juicio respectivo. En cuanto al delito común de que teniendo el carácter de general, se quedase voluntariamente y sin licencia en el exterior durante la guerra, el gobierno declaró, como podía declararlo el Congreso, conforme al artículo 104 de la constitución, que había lugar a proceder contra el Sr. Gral. Ortega y que se procederá al juicio respectivo cuando se presente en el territorio nacional. Declaró el gobierno que había lugar a proceder, porque para esto bastan hechos tan notorios como los referidos, que fundan más de lo necesario la presunción legal de culpabilidad para poderse constituir el procedimiento; pero el gobierno no ha juzgado ni condenado al Sr. Gral. Ortega, sino que sólo ha dispuesto someterlo al juicio en que se pueda examinar y calificar su culpabilidad.

La restricción puesta por el Congreso fue que el gobierno no pudiera contrariar las prevenciones relativas de la constitución. Como es bien sabido, la idea de esta restricción fue sugerida por algún procedimiento fuera de toda forma judicial que pudo haber antes contra un funcionario público. Así es que, según el espíritu que dio origen a la restricción y según su sentido literal, lo prevenido en ella, no fue que dejaran de cumplirse y aplicarse con justicia las prevenciones de la constitución, sino que no se contrariasen de un modo injusto, con procedimientos arbitrarios. El gobierno puede aplicar, como podría hacerlo el Congreso y no puede contrariar, como tampoco el Congreso podría contrariar, aquellas prevenciones de la constitución. Es claro que no se contrarían, sino que antes bien se cumplen las prevenciones de una ley, cuando se aplican con justicia en los casos necesarios.

Sería un absurdo inconcebible suponer que el Congreso hubiera querido dejar establecida la absoluta impunidad de los funcionarios públicos, durante la guerra, cuando las consecuencias podrían ser gravísimas, fuera de toda ponderación. Sería absurdo que el gobierno debiese respetar y dejar en sus puestos a los que durante la guerra traicionasen a la patria, o la abandonasen, dejándola entregada al enemigo, cuando han tenido títulos del más sagrado deber para no cesar de defenderla. De este modo, el gobierno habría debido respetar a don Santiago Vidaurri después de su traición y habría debido dejar que siguiera ejerciendo el cargo de gobernador de Nuevo León, hasta ahora y mientras no hubiese un Congreso que mandase proceder contra él. De este modo y mientras no hubiera Congreso, el gobierno debería respetar y dejar en sus puestos, durante la guerra y aun después de ella, a otros gobernadores y a otros magistrados de la Corte que han traicionado y abandonado la causa de la patria.

Otro de los medios de defensa, que indicó el Sr. Gral. Ortega, fue que el cargo de presidente o magistrado de la Corte sólo es renunciable ante el Congreso o ante la diputación permanente del mismo. Observó que él no lo había renunciado, lo cual es cierto, aunque, por lo demás, no sea éste el único modo con que puede dejarse de tener tal cargo. También el de diputado sólo es renunciable ante el Congreso; pero un diputado, lo mismo que un presidente o magistrado de la Corte, pueden dejar de serlo, no sólo por renuncia, sino por declaración de culpabilidad o por preferir otro cargo diverso en el caso de incompatibilidad constitucional. En este último caso, basta el simple hecho de entrar a desempeñar el cargo que se prefiere, sin necesidad de hacer formal renuncia del que se deja como se ha practicado muchas veces en el Congreso, respecto de personas en quienes ha concurrido una doble elección, para diputados y para magistrados de la Corte.

Un solo medio más de defensa indicó el Sr. Gral. (González) Ortega, refiriéndose a la incompatibilidad constitucional del cargo de Presidente de la Corte de Justicia con el de gobernador del estado de Zacatecas y al hecho de que prefirió desempeñar el cargo de gobernador, abandonando en San Luis Potosí el de Presidente de la Corte. Los

fundamentos de esa incompatibilidad constitucional quedaron expuestos desde la resolución que se le dirigió en la ciudad de Chihuahua, el 30 de noviembre de 1864 y fueron repetidos en la circular con que se acompañaron los decretos de 8 de noviembre de 1865.

Expuse en aquellas dos veces que, según la regla expresa del artículo 118 de la constitución, ninguno puede tener dos cargos de elección popular, permitiéndose al nombrado elegir el qué quiera desempeñar. Expuse desde entonces que, aunque en la letra de este artículo se habló del caso de dos cargos de la unión, era igual y necesariamente aplicable en el caso de un cargo de la unión y otro de un estado; por no haber, para este caso, otra regla diversa en la constitución y porque la razón de incompatibilidad, no sólo existía igualmente en ambos casos, sino que era mayor el segundo. Además de exponer también otros fundamentos, observé que esto era tanto más indudable, cuanto que en la constitución actual no se puso ninguna otra regla sobre incompatibilidad, ni menos se previno que el cargo de la unión prefiriese al cargo de un estado, como estuvo prevenido en la época de otras constituciones anteriores.

El Sr. Gral. (González) Ortega, con la inexactitud que hay en todos los puntos de su manifiesto, dijo que, para aplicar en su caso la incompatibilidad, "se había tenido que recurrir a la autoridad de constituciones no vigentes". Lo contrario, precisamente, fue lo que se alegó en la resolución y en la circular citada. Se dijo, como acabo de observar, que en la época de otras constituciones anteriores, fue cuando hubo la regla, que no hay en la actual, de que, elegida una persona para dos cargos, debiera preferir el de la unión al de un estado. Siendo ésta una regla muy conocida y practicada y no pudiendo suponerse que, al formar la constitución actual, se dejase de leer y consultar las constituciones precedentes del régimen federal, para ver cuáles de sus reglas conviniera conservar, modificar o contrariar, parece bien fundado que se quiso omitir intencionalmente la antigua regla, de que el cargo de la unión prefiriese al de un estado y que, habiendo ahora una sola regla sobre incompatibilidad, es necesariamente aplicable en el caso de un

cargo de la unión y otro de un estado, lo mismo que en el caso de dos cargos de la unión.

Cuando, en julio de 1863, fue el Sr. Gral. (González) Ortega a desempeñar el cargo de gobernador constitucional de Zacatecas, sin ninguna autorización ni licencia para ese efecto, abandonando en San Luis Potosí el cargo que ya había entrado a desempeñar de Presidente Constitucional de la Corte de Justicia, el gobierno le advirtió, desde luego, dicha incompatibilidad. Le manifestó los inconvenientes de que dejase de tener el carácter de Presidente de la Corte, en una época que las circunstancias de la guerra impedían hacer nueva elección popular, para que con el título de ella hubiese quien pudiera sustituir la falta del Presidente de la República. Le dijo entonces que si, a pesar de esto, insistía en desempeñar el gobierno de Zacatecas, pidiera licencia para ese fin y que el gobierno estaba dispuesto a concedérsela en uso de las amplias facultades que le había delegado el Congreso, única autoridad que podía conceder licencia al Presidente de la Corte, para que, conservando este título, desempeñase por algún tiempo el gobierno de un estado. Desde julio hasta diciembre de 1863, que el gobierno salió de San Luis (Potosí), fue inútil que se dirigiera oficialmente al Sr. Ortega y que le instase también varias veces en cartas privadas. No dejó el gobierno de Zacatecas, no quiso pedir la licencia que se le ofreció y no contestó en aquellos meses, ni ha contestado nunca a lo que oficialmente se le dijo sobre el asunto. Todos estos pormenores fueron consignados en la resolución de 30 de noviembre de 1864, dirigida al mismo Sr. Ortega, quien nada replicó entonces, porque nada podía objetar contra su verdad y exactitud.

Determinó el gobierno, en aquella resolución, que teniendo por único móvil el interés nacional y usando de sus amplias facultades, declaraba de nuevo al Sr. (González) Ortega Presidente de la Corte, para que (en) caso de falta del Presidente de la República pudiera sustituirlo. Ahora ha dicho en su manifiesto que no solicitó, ni necesitaba esa declaración. Sin embargo ella fue muy clara y muy expresamente apoyada en todos los fundamentos expuestos sobre la incompatibilidad constitucional y sobre el abandono que había hecho de aquel cargo

prefiriendo ir a desempeñar el gobierno de Zacatecas. Pero entonces el Sr. Ortega juzgaba de otro modo las circunstancias; pensaba irse, como se fue, al exterior y no protestó, ni contestó una sola palabra contra los fundamentos y los términos de la declaración.

Ha alegado en el manifiesto que, antes de lo ocurrido en San Luis (Potosí), desempeñó otras veces diversos cargos, conservando el carácter de Presidente de la Corte, sin que se le objetase la incompatibilidad. Acerca de esto citó algunos hechos, que de ningún modo eran conducentes para su propósito.

En 1861 fue nombrado Presidente interino de la Corte mientras se procedía a hacer, como se hizo desde luego, nueva elección popular. Entretanto se verificaba ésta, desempeñó el cargo que tenía de gobernador del estado de Zacatecas: y ha alegado esto, sin advertir que con toda evidencia era inútil para su objeto. Es bien claro, que un interinato pasajero no podía obligarlo a dejar el carácter permanente durante su período de gobernador constitucional de un estado. Sobre todo, el cargo que tenía de gobernador era de elección popular, mientras que no lo era el interinato de la Corte. Para citar aquel hecho, no advirtió el Sr. (González) Ortega, o esperó que algunos de sus electores no advirtiesen, que la incompatibilidad del artículo constitucional, alegada en la primera resolución y en el decreto posterior, tan sólo se refiere a dos cargos de elección popular.

Dijo también que en aquella época había desempeñado sucesivamente y por un poco tiempo, el gobierno y comandancia militar de San Luis (Potosí) y las comandancias militares de Aguascalientes y Tamaulipas, comisiones que le confirió el gobierno de la República. Para citar estos hechos, tampoco advirtió que no se trataba de cargos de elección popular, sino de comisiones pasajeras conferidas por el gobierno, que tenía todas las facultades delegadas por el Congreso y que, por el mismo hecho de conferirle tales comisiones, le daba la licencia necesaria para desempeñarlas.

Después que obtuvo en 1862 la elección popular de Presidente de la Corte y después de la muerte del Gral. Zaragoza, el gobierno le confió el mando del Ejército de Oriente en Puebla y también le encargó el

gobierno y comandancia militar de aquel estado. En el manifiesto citó igualmente estos hechos, sin advertir que se trataba siempre de comisiones conferidas por el gobierno, que tenía amplias facultades para darle la licencia necesaria. Hizo todas estas citas, sin reflexionar que en ninguna de ellas se comprendía un solo hecho por el cual dejase de ser cierto que la primera vez, en que tuvo lugar la incompatibilidad constitucional, fue cuando, entre dos cargos de elección popular, prefirió, de propia voluntad y contra la advertencia oficial del gobierno de la República, ir a desempeñar el de gobernador de Zacatecas, abandonando en San Luis (Potosí) el de Presidente de la Corte.

Acerca de este punto, se nota otra de las numerosas contradicciones del manifiesto. Ha pretendido el Sr. (González) Ortega hacer creer que nada más se le objetó en San Luis (Potosí) la incompatibilidad constitucional por la prevención que tuviera en su contra el gobierno, de quien dice que ha estado siempre empeñado en nulificarlo. Al mismo tiempo, ha pretendido contestar los fundamentos de la incompatibilidad, citando las diversas e importantes comisiones que le confirió el gobierno y con las que le dio siempre ocasión de que pudiera prestar buenos servicios. Si él no pudo o si las circunstancias no le permitieron prestarlos según se necesitaban, esto no fue culpa del gobierno.

Entre las imputaciones que quiso acumular en el manifiesto, puso la de que, con objeto de impedirle desempeñar el gobierno de Zacatecas, escribió de San Luis (Potosí) el presidente al Sr. don Severo Cosío, para halagarlo con la continuación en aquel gobierno que había estado desempeñando. Ha querido el Sr. (González) Ortega formar una imputación y dar a su modo un aire de intriga al hecho natural y sencillo de lo que el presidente escribió al Sr. Cosío, que contestó expresando igual opinión y que no fue sino lo mismo que se dijo al Sr. Ortega oficialmente y en cartas privadas, respecto de la incompatibilidad constitucional.

Por razón de esto y porque según la voz pública y general el Sr. (González) Ortega sólo se ocupaba en Zacatecas de cosas que, en vez de servir, perjudicaban a lo que era necesario hacer para disponerse a

combatir al enemigo, fue por lo que no se creía conveniente que desempeñase el gobierno de aquel estado. Acaso por esto mismo, habría quienes pensasen que conviniera confiarlo al Sr. Zamora, que fue en otro tiempo su gobernador constitucional; pero es absolutamente inexacto que el gobierno de la República enviase comisionados o agentes con tal objeto, como lo dijo el Sr. Ortega en el manifiesto sin que haya indicado, ni pueda dar, sobre esto, prueba ninguna.

En verdad, no faltaban al gobierno motivos para prever y temer que el Gral. (González) Ortega no hiciera entonces en Zacatecas, como no hizo, lo que fuese más provechoso para la defensa nacional. Había muchos buenos ciudadanos en ese patriota estado, que podrían haber desempeñado muy útilmente el gobierno del mismo en aquellas circunstancias. El Gral. Ortega ha imputado al gobierno de la República que quiso desde entonces privarlo del carácter de Presidente de la Corte, cuando al contrario, para que pudiese conservarlo, le dijo de oficio y le repitió mucho en cartas privadas, que no debía desempeñar el gobierno particular de Zacatecas. Viendo que insistía en tenerlo y queriendo el gobierno proceder con excesiva prudencia, en obvio de otros males, llegó hasta decirle que pidiese la licencia necesaria, ofreciendo concedérsela. Esto se lo he repetido en la resolución de 30 de noviembre de 1864 y nada replicó entonces, porque no podía negarlo.

Con igual falta de exactitud, quiso emplear en el manifiesto otro medio de sostener la misma imputación. Para hacerla, olvidaba siempre que, contra los deseos y las prevenciones del gobierno, toda la dificultad se había originado por su tenaz voluntad de ir a permanecer en Zacatecas, para los objetos particulares que fueron muy públicos en aquella ciudad. Refiriéndose a lo que él llamó un decreto y que fue una circular para la reunión de los magistrados de la Corte dijo: "Se quería que desapareciera el Presidente Constitucional de la Corte, el elegido del pueblo y sustituirlo con otro nombrado por don Benito Juárez, para destituirlo a su vez cuando así le conviniera. Estas han sido las tendencias del gobierno desde la ciudad de San Luis (Potosí). Así lo hizo a su llegada a los estados de Nuevo León y Coahuila, expidiendo un decreto para la reunión de los magistrados de que se compone la Corte. Me hallaba

entonces mandando una división, que operaba contra el ejército francés en el interior de la República. No se miraba otro objeto en aquel decreto, que el de nombrar un Presidente de la Corte que debiera su creación y su nombramiento al Presidente de la República".

Para que pueda verse que el Sr. (González) Ortega no puso un solo concepto exacto en estas frases, acompaño, bajo el número uno, la circular a que se refirieron, expedida por el ministerio de Justicia en Monterrey el 10 de julio de 1864 y publicada en el *Periódico Oficial* de la misma fecha.

No es exacto que el gobierno la expidiese a su llegada a los estados de Nuevo León y Coahuila. Seguramente lo dijo así el Gral. (González) Ortega, por su propósito de significar que el gobierno se ocupaba de él con mucha insistencia. El gobierno llegó al Saltillo en 9 de enero, se trasladó después a la ciudad cercana de Monterrey en 2 de abril y no expidió la circular sino hasta el 10 de julio.

Tampoco es exacto que el Gral. (González) Ortega estuviese entonces con su fuerza, operando contra el ejército francés en el interior de la República. Acaso quiso asegurarlo así, para ponderar a la vez los servicios que prestaba entonces y para hacer más grave su imputación al gobierno, con decir que se ocupaba de perjudicar a un general ausente, que estaba muy lejos combatiendo al enemigo en el interior. Sin embargo, en el mismo número del *Periódico Oficial* en que se insertó la circular, se publicó la noticia de que el Gral. Ortega se había dirigido ya cerca del gobierno y que con la fuerza de su mando había llegado el 6 del mismo julio a la villa de Parras, del estado de Coahuila. Desde el 30 de junio anterior había llegado a la villa de Viesca, de aquel estado y, pocos días después de expedida la circular, llegó personalmente a la ciudad de Monterrey. Salió del estado de Zacatecas sin tener ocasión de combatir al enemigo; se retiró al de Durango, sin ir en auxilio de su capital como lo había ofrecido y marchó cerca del gobierno.

Menos exacto es que la circular se refiriese a que, de algún modo, se pudiera aplicar al caso del Sr. (González) Ortega. Según se ve en ella, su objeto fue revocar la autorización dada en San Luis (Potosí) a los magistrados de la Corte, el 18 de diciembre de 1863, para que escogieran

el lugar de su residencia, mientras se fijaba el punto donde pudiera residir la Corte y, al mismo tiempo, resolver y fijar quiénes conservaban el carácter de magistrados, no respecto de los nombrados por elección popular, sino de los nombrados por el Congreso o por el gobierno. Con este objeto se mencionaron los que estaban en el segundo caso, advirtiendo que los mencionados eran los únicos entre los de este caso que conservaban el carácter de magistrados y que dejarían de tenerlo por el hecho de no presentarse dentro del término de un mes. En cuanto a los electos popularmente, se mencionaron los que estaban expeditos para desempeñar sus respectivas magistraturas, sin expresar que los mencionados fueran los únicos y sin decir de ningún modo que perdieran su carácter por el hecho de no presentarse dentro del término señalado.

Bajo este concepto, de ningún modo pudo creer el Sr. (González) Ortega que fuera aplicable a su caso la circular, con el fin que supuso de privarlo del título que creía tener todavía ni aun cuando, sin haberse mencionado al Presidente de la Corte, creyera que se comprendía bajo el nombre genérico de los magistrados. Antes y después de la circular, el caso del Sr. Ortega quedaba en el mismo estado que quedó en San Luis (Potosí), cuando él quiso abandonar voluntariamente el cargo de Presidente de la Corte, prefiriendo el de gobernador de Zacatecas. Es tan inexacto lo que dijo sobre este punto en su manifiesto que si entonces hubiera pensado que lo comprendía la circular como él estaba cerca del gobierno, le habría sido muy fácil presentarse dentro del término que se fijó de un mes y le habría sido tanto más fácil, cuanto que estuvo personalmente por varios días en Monterrey, mucho antes de cumplirse el término.

No se retrajo el Sr. (González) Ortega de acumular en su manifiesto unas sobre otras inexactitudes, con el afán de dirigir al gobierno cuantas imputaciones pudiera sugerirle su imaginación apasionada, aunque fueran del todo inconducentes al asunto de los decretos y aunque debieran parecer inverosímiles a cualquiera persona de sentido común. Tal es la imputación de que el gobierno fue voluntariamente cómplice de la traición de don José López Uruga. Sería

inconcebible el motivo porque el Sr. Ortega atribuyera al gobierno esa complicidad, si no se hubiera encargado él mismo de explicarlo.

El ejército que mandaba don José López Uruga era, en mucha parte, el mismo que estuvo desde junio hasta noviembre de 1863 en Querétaro y otros puntos cercanos. Se había organizado y sostenido por el gobierno, empleando los recursos de que pudo disponer. Declarados en sitio todos los estados en que operaba ese ejército, se hallaban bajo la acción directa del gobierno. Aun en el caso supuesto por el Sr. (González) Ortega, de que el gobierno tuviese contra los estados, durante la guerra, unas prevenciones que nunca había tenido antes en algunos años durante la paz, habría sido muy singular, que para mejor influir en aquellos estados, quisiera comenzar por entregarlos al enemigo. A pesar de todo esto, el Sr. Ortega ha tenido voluntad de decir que el gobierno favoreció, o toleró y quiso que se consumase la traición de don José López Uruga, con tal de que desapareciera aquel ejército y así "se destruyeran esos elementos creados por los estados de la confederación, con sus recursos y esfuerzos particulares".

Para sostener semejante imputación, sin detenerse por el temor de que todo el mundo, amigos y enemigos, la calificasen de absurda, dijo el Sr. (González) Ortega, en su manifiesto, que él y el ciudadano Gral. Felipe B. Berriozábal, se empeñaron en presentar datos de la traición que maquinaba don José López Uruga, sin poder conseguir que el gobierno dictase contra el mismo medida ninguna.

Refiriéndose al ciudadano Gral. Berriozábal, dijo que "remitió al gobierno una comunicación oficial, si bien respetuosa, concebida en términos enérgicos, pidiendo en ella: que o se le vindicaba de los cargos que contra él hacía (López) Uruga, o hacía publicar documentos bien deshonorosos para el mismo (López) Uruga y para el gobierno". Después de llamar la atención el Sr. (González) Ortega sobre esas palabras, añadió que "Éste, el gobierno, concedió lo que se pretendía". Sobre ese punto, me limitaré a manifestar que absolutamente no es cierto. El ciudadano Gral. Berriozábal nunca dijo al gobierno, ni nunca hubiera podido tener datos para decirle, que podía publicar documentos deshonorosos para el mismo. Tampoco el gobierno hubiera tolerado que se lo dijese, sin

disponer que se procediera a lo que fuese justo. Agregaré tan sólo, por lo que he de observar en seguida sobre la fecha de la resolución oficial del gobierno acerca de don José López Uruga, que el tiempo en que se trató el asunto del ciudadano Gral. Berriozábal, se conoce por la fecha de la comunicación en que se le vindicó, la cual fue del 15 de junio de 1864, publicada en el *Periódico Oficial* del 19 del mismo mes.

Poco antes del caso del ciudadano Gral. Berriozábal y del aviso del ciudadano Gral. (González) Ortega, tuvo el gobierno conocimiento de las maquinaciones de traición de don José López Uruga. Por la gravedad de las circunstancias y por la grande distancia en que aquél estaba del gobierno, habría sido imprudente, sin algunos pasos previos, dictar desde luego una medida violenta que pudiera llegar en momentos inoportunos, precipitando los sucesos con peores consecuencias. Lo que sí podía hacer, e hizo en el acto el gobierno, fue dirigir algunas comunicaciones precautorias, confiando, como debía confiar, en el patriotismo y lealtad de muchos de los jefes principales que militaban en aquel ejército.

Cuando don José López Uruga consumó a poco su traición, no pudo arrastrar en ella ninguna parte del ejército, justificándose así las precauciones y la previsión del gobierno. Todo aquel ejército se conservó por algún tiempo y si después perdió parte de sus fuerzas en las vicisitudes de la guerra, sus restos, aumentándose siempre con nuevas fuerzas, han seguido y siguen combatiendo por la independencia, mientras el Sr. (González) Ortega ha permanecido y permanece en el exterior.

Ha dicho el Sr. (González) Ortega "que los datos de la traición de (López) Uruga los había remitido el ilustre y patriota Gral. Arteaga al gobierno. En efecto, los envió con un comisionado que, al segundo día de su llegada, salió de Monterrey el 2 de julio de 1864, llevando el decreto del día 1º de ese mes, en que se destituía a don José López Uruga y se confiaba al Gral. Arteaga el mando en jefe del ejército. La insensata imputación del Sr. Ortega, atribuyendo al gobierno un segundo pensamiento contra los estados y para la destrucción de aquel ejército, es una imputación que necesariamente recaería sobre el hecho de que el gobierno nombró al Gral. Arteaga: tan valiente patriota, tan constante

liberal, tan digno en su conducta y que siguió combatiendo 16 meses hasta morir gloriosamente por la patria, mientras el Sr. Gral. Ortega ha permanecido y permanece en el exterior.

Ha explicado, en el manifiesto, que los datos sobre aquella traición le fueron ministrados por el ciudadano Gral. Ramón Corona, quien le confió unos pliegos para que los remitiese al gobierno, como dijo que los había remitido, "mandándolos con un comisionado especial". Y agregó: "Este comisionado fue don Marcelino E. Caveró, oficial que también acababa de separarse de las fuerzas de (López) Uruga; Caveró debía de dar al gobierno informes verbales".

El Sr. (González) Ortega cuidó de no indicar el tiempo en que envió aquellos pliegos. Los remitió con una carta que escribió al presidente desde El Saucillo, en el estado de Durango, el día 11 de junio de aquel año, en la que, hablando de ese comisionado, dijo: "El joven oficial peruano que entregará a usted esta carta y que trae otra recomendación para usted acaba de llegar de Colima y ha servido cuatro o cinco meses en el ejército que manda el Sr. Gral. (López) Uruga y por lo mismo lo mando corriendo la posta tanto para que ponga en manos de usted esta carta como para que le den un informe verbal y circunstanciado del estado que guarda nuestro ejército del sur y de cuanto ocurre por aquel rumbo".

Se puede observar de paso, por los términos de esa carta, que el oficial peruano Caveró iba desde Colima a la residencia del gobierno, llevando para él cartas de recomendación y que sólo tocó de tránsito en el lugar donde estaba el Sr. (González) Ortega. Así es que, ni él lo mandaba, ni era comisionado suyo, ni fue corriendo la posta, sino que fue viajando como se podía en aquellas circunstancias de guerra y por un camino en parte desierto. Pero estas son pequeñas inexactitudes, con las que el Sr. (González) Ortega se propondría dar mejor aspecto a la forma y a la oportunidad de su aviso. Se necesitaría escribir un abultado volumen, si hubiera de notarse las inexactitudes de esa clase, que apenas podrán faltar en algunos párrafos del manifiesto.

El comisionado del Gral. Arteaga, que el gobierno tenía ya antecedentes para esperar de un día a otro, llegó cuando acababa de

ocurrir el caso del ciudadano Gral. Berriozábal y cuando acababa de recibirse la carta del Sr. (González) Ortega, de 11 de junio. El gobierno expidió desde luego el decreto de 1º de julio, en que se destituía a don José López Uruga y se nombraba al Gral. Arteaga. Como he dicho, el comisionado de éste salió de Monterrey el 2 de junio, llevando el decreto que se insertó en el *Periódico Oficial* de 27 del mismo julio. No se había creído urgente ni oportuno publicarlo allí en los días anteriores, ya porque no era en Monterrey donde debía surtir sus efectos y ya porque así convenía para la seguridad del comisionado, persona de Guadalajara bastante conocida, que había necesitado, en su viaje a Monterrey y necesitaba en su regreso, atravesar diversos puntos ocupados por el enemigo.

El Gral. (González) Ortega estuvo a fines del mismo julio en Monterrey, donde debió leer el decreto y saber cuanto había pasado. Pero le convenía hacer una imputación más en su manifiesto y no fueron bastante para detenerlo, ni las constancias de las fechas, ni la publicidad oficial de los hechos. Creyó conveniente, para su causa, asegurar que ni él, ni el ciudadano Gral. Berriozábal, ni el comisionado del Gral. Arteaga, habían podido conseguir que el gobierno dictase medida ninguna respecto de don José López Uruga y se permitió decir que nada pudieron lograr, por "el apoyo con que contaba (López) Uruga en los Sres. Juárez y Lerdo". Luego añadió: "Nada quiso oírse, nada quiso escucharse tenazmente por los Sres. Juárez y Lerdo".

Nada valía el dicho y datos exhibidos por personas caracterizadas, nada valían lo que reclamaba el honor de México, la moralidad de nuestro ejército y la salvación de elementos necesarios para la defensa decorosa de la Independencia nacional". El contraste entre estas palabras del Sr. (González) Ortega y la verdad pública de los hechos, es otra prueba de cuál fue el espíritu con que escribió el manifiesto y de cuál es el valor de sus imputaciones.

Ha dicho que cuando fue de San Luis (Potosí) a Zacatecas, el gobierno envió agentes a ese Estado con el fin ostensible de agenciar recursos; pero con el objeto real de oponerle dificultades para que no pudiese organizar fuerzas. En el manifiesto quiso emplear el nombre

vago de agentes, omitiendo de propósito expresar el título y carácter de ellos, porque, con sólo haberlo expresado, se desvanecerían todas sus gratuitas suposiciones.

Los dos únicos funcionarios, que el gobierno envió a Zacatecas, fueron los que debía tener en aquel estado, lo mismo que en los demás conforme a la constitución y leyes preexistentes.

Uno era el juez de distrito, a quien correspondía administrar la justicia federal y el otro, el jefe de Hacienda a quien tocaba recaudar las rentas propias de la federación, separadamente de las rentas propias y particulares del estado, que debían recaudarse por los empleados del mismo. El Sr. (González) Ortega no puso dificultad para que funcionase el juez de distrito; pero calculando que para evitarse escándalos en aquellas circunstancias podría no agotarse la prudencia del gobierno, se propuso abusar de ella y resistió e impidió, hasta el fin, que funcionase el jefe de Hacienda.

Desde julio hasta diciembre de 1863, que el gobierno permaneció en San Luis (Potosí), se le dirigieron muchas prevenciones oficiales y se le instó en muchas cartas privadas sobre este punto. Respecto de las prevenciones oficiales, el Sr. (González) Ortega siguió el sistema de no contestarlas, que fue su mismo sistema, en cuanto al abandono del cargo de Presidente de la Corte. Respecto de las cartas privadas, después que solía retardar algunos días sus respuestas, se limitaba en ellas a ofrecer siempre que dentro de poco contestaría las comunicaciones oficiales. En alguna vez, que acaso le pareció cerca de agotarse la prudencia del gobierno, envió a San Luis (Potosí) dos comisionados, para pedir que se revocasen las órdenes y se le permitiera disponer libremente de las rentas federales, con lo que prometía hacer mucho en provecho de la defensa nacional.

Aquella comisión, lo mismo que su referida carta escrita en Nueva York el 8 de mayo de 1865, sólo era un nuevo medio de ganar tiempo. El gobierno manifestó a los comisionados el derecho y el deber que tenía de cuidar la administración de sus propias rentas, para asegurarse de que se invirtieran real y provechosamente en las atenciones de la guerra, negándose por esto a revocar sus órdenes y aun volviendo a

reproducirlas. Sin embargo, el Sr. (González) Ortega siguió disponiendo como le parecía de las rentas federales y no dejó nunca que funcionase el jefe de Hacienda. Ha querido hacer el cargo de que el gobierno le opuso dificultades, cuando, al contrario, él fue quien las opuso al gobierno, en abierta contravención de las leyes. Su manifiesto es la repetición del medio tan gastado por muchos, que con proferir siempre vanas declamaciones de un respeto teórico a la constitución y a las leyes, pretenden encubrir su olvido práctico de ellas.

Se ha permitido asegurar que, para no accederse a la petición de sus comisionados, el gobierno les dijo que ya no necesitaba más fuerzas. Careciendo de todo fundamento esta otra aseveración y siendo tan inverosímil en sí misma, me bastará decir que no es cierta.

Ha referido también que, para solicitar la revocación de aquellas órdenes, ofreció, por medio de sus comisionados, remitir cada mes al gobierno las cantidades que le señalase. Yo no hablé con los comisionados, pues no me correspondía tratar de ese asunto, e ignoro en qué términos podrían hacer la oferta; pero es bien claro que el gobierno no se podía ocupar seriamente de ella. Ni deseaba el gobierno disponer sino de lo que le correspondía conforme a las leyes; ni podía confiar en tal oferta, cuando el Gral. (González) Ortega había comenzado por tomar, e insistía en seguir, como siguió, tomando las rentas propias del gobierno, contra sus repetidas órdenes y con abierta infracción de las mismas leyes.

Hubiera podido el gobierno dejar de repetir sus órdenes y habría convenido en autorizar al Gral. (González) Ortega, para que por algún tiempo dispusiese de las rentas federales recaudadas en Zacatecas, si hubiera tenido algunos motivos para creer que realmente se invirtieran allí en organizar y aumentar fuerzas. Lejos de que el Sr. Gral. Ortega enviase estados o algunas noticias sobre el número, organización y aumento de fuerzas y lejos de que diera entonces, ni haya dado después, cuentas o algunas noticias sobre la inversión de dichas rentas federales en tales objetos, el gobierno sabía lo contrario, por numerosos informes y por la voz pública.

Fueron muy públicos en el estado de Zacatecas y especialmente en su capital, los objetos particulares de que se ocupó entonces preferentemente el Sr. (González) Ortega y también que las rentas federales y del estado no se invertían en organizar y aumentar fuerzas.

Transcurrieron todos los meses en que pudo procurarse esto con mucho éxito, si se hubiera aprovechado el grande patriotismo del estado de Zacatecas; pero hasta que el enemigo llegó a sus fronteras, en principios de 1864, fue cuando el Sr. Gral. (González) Ortega quiso improvisar una fuerza. Él mismo lo ha revelado inadvertidamente en su manifiesto, por preciarse de que "en uno o dos meses levantó, equipó y armó una fuerte división de las tres armas". Lo que hubiera podido procurarse en muchos meses, disponiendo de los recursos regulares de las principales poblaciones, no podía hacerse bien en uno o dos meses, cuando no se habían empleado en esto aquellos recursos y no podían tenerse ya sino muy escasos. El Sr. Gral. Ortega salió unos cuantos meses después, no sólo de las principales poblaciones, sino de todo el estado de Zacatecas, sin haber tenido ocasión de combatir al enemigo.

He indicado antes que, al retirarse para el estado de Durango, ofreció auxiliar y no auxilió la capital del mismo. El ciudadano Gral. José María Patoni, gobernador de aquel estado, después de desempeñar por ese tiempo una comisión en Chihuahua, iba ya en camino de regreso con su fuerza para la ciudad de Durango, fortificada con anterioridad. Una columna francesa de cosa de mil hombres, o menos, parecía avanzar en dirección de aquella ciudad, que tenía una guarnición de 500 hombres más o menos. El ciudadano Cayetano Mascareñas, gobernador sustituto durante la ausencia del Gral. Patoni, había dudado se tendría necesidad de evacuar la ciudad, o si su guarnición podría defenderla mientras llegaba dicho general dentro de pocos días.

En tales circunstancias, el Sr. Gral. (González) Ortega escribió al ciudadano Mascareñas el 11 de junio de 1864, desde la hacienda del Saucillo, situada a cosa de veinte leguas de Durango, una carta en que le decía:

Me han asegurado que pensaba usted evacuar esa ciudad. Respetando el juicioso parecer de usted en este punto, me permitirá suplicarle que no abandone usted por motivo alguno esa ciudad, de cuya salvación y seguridad le respondo a usted con mi honor y mi cabeza, mientras Zacatecas y el Fresnillo no sean reforzados fuertemente por alguna expedición de México o San Luis (Potosí), pues ya le he dicho a usted que las fuerzas de ambas ciudades son impotentes para dejar guarnecidas aquellas poblaciones y emprender algo serio sobre mi división o sobre esa ciudad. Yo me encuentro en esta hacienda con más de 3,000 hombres y 16 piezas de artillería.

En efecto, aun suponiendo que se exagerase el número de la fuerza del Sr. (González) Ortega, habría podido auxiliar eficazmente a Durango, sobre todo sabiéndose, por los avisos del Gral. Patoni, que llegaba dentro de muy pocos días. El enemigo que ocupaba Zacatecas y el Fresnillo, no fue ni podía ser reforzado en el momento desde México o San Luis (Potosí) pero el Sr. Gral. Ortega, luego que hizo su oferta, dejó la línea del camino de Zacatecas a Durango; marchó a una distancia de ochenta o más leguas de esa línea hasta la villa de Viesca, adonde llegó el 30 de junio y en seguida hasta Parras, poblaciones ambas del estado de Coahuila y la columna francesa avanzó ya sin tropiezo a ocupar la ciudad de Durango, que se perdió en uno de los primeros días de julio.

A principios del mismo año 1864, luego que el gobierno se trasladó de San Luis (Potosí) al Saltillo, envió allá el Sr. (González) Ortega una comisión de que habló en su manifiesto sin mencionar el objeto de ella, por estimar que no le convenía recordarlo. Su objeto no fue secreto sino bastante público, ocupándose de él la prensa periódica.

Era pedir al presidente que entregase al Sr. (González) Ortega el gobierno. El principal motivo que alegó entonces para pedirlo, fue que el gobierno francés había declarado su propósito de no tratar con el presidente, de no reconocerlo y de excluirlo del gobierno de la República. Por este motivo, pensando el Sr. Ortega que la guerra había llegado a un punto en que a su juicio no quedaba más recurso que someterse a las

exigencias del enemigo y tratar con él, solicitaba encargarse del gobierno para prestar ese servicio a su patria.

No es este el lugar de explicar cómo calificó el gobierno el objeto de la comisión. Todos pueden calificar cuál fuese la decisión para sostener la guerra, de quien creyera llegado el tiempo supremo de no haber más recurso que tratar con el enemigo, sometiéndose a sus exigencias; cuál fuese la influencia que con manifestar esa opinión se debiera ejercer sobre el espíritu del pueblo para que sostuviese la guerra; cuál fuese el patriotismo de aceptar al fin capital de la intervención extranjera, queriendo someterse a que un gobierno extraño se hiciera el árbitro de cambiar el gobierno de la patria; cuál fuese la aptitud política de quien juzgase que el enemigo estuviera dispuesto a tratar en ese tiempo y cuál fuese también la aptitud de quien juzgase que el enemigo no quisiera tratar nunca con el presidente, a quien había hecho cargos políticos sin hacérselos sobre su conducta personal y que sí quisiera tratar desde luego con el Gral. (González) Ortega, a quien, además de hacerle los mismos cargos políticos, le había hecho ya el cargo de que faltó a su palabra para evadirse de donde lo tenía prisionero.

Creo, en verdad, que el enemigo no habría tenido justicia ni razón ninguna para hacerle tal cargo; pero no por esto dejaba de ser cierto que se lo había hecho. Si este injusto cargo podría ser una dificultad personal que meditase el Sr. (González) Ortega para evitar el caso de volver a caer prisionero, podría ser también una dificultad personal para su proyecto y su deseo de tratar desde luego con el enemigo.

Sin querer ocuparme de esto, sólo he tocado el punto, porque el Sr. (González) Ortega habló de aquella comisión para hacer otra imputación al gobierno. Ha dicho que el ciudadano Trinidad García de la Cadena fue uno de los individuos de la comisión y que, después de tratar del asunto de ella, yo lo invité para una conferencia privada con objeto de proponerle que, a la primera salida del Sr. Ortega de la ciudad de Zacatecas, se apoderase del gobierno del estado, lo que aprobaría luego el gobierno de la República, dándole el nombramiento de gobernador. Ha dicho también que el Sr. García de la Cadena rehusó la proposición, objetando que sería introducir en el estado la guerra civil.

Esta relación del Sr. (González) Ortega no es exacta, como no lo son las demás que ha hecho. El gobierno consideraba que se habría comprometido al Sr. García de la Cadena para que fuese en aquella comisión y no por esto dejaba de tener de él la opinión debida a los servicios que había prestado antes, como lo está prestando también en la actualidad. Por esta razón y por los fundados motivos que tenía el gobierno, para temer que el Sr. Ortega abandonase pronto, no sólo la capital y las principales poblaciones de Zacatecas, sino todo el estado, lo que se propuso al Sr. García de la Cadena, no fue que cuando aquél abandonase la capital se apoderase del gobierno del estado y que se le mandaría entonces el nombramiento de gobernador, sino que se le propuso darle desde luego una autorización oficial, para que en caso de abandonar el Sr. Ortega todo el estado, se encargase del gobierno del mismo. Con esto se vería tal vez comprometido el Sr. Ortega a no salir de él y, en caso contrario, se precaverían de algún modo los inconvenientes de que lo dejase, como poco después lo dejó abandonado. El Sr. García de la Cadena, ya porque en su consideración particular al Sr. Ortega, no creía que llegase a hacerlo y ya porque no estimaba oportuno que se anticipase la previsión oficial del caso, manifestó preferir que si éste llegaba, resolviera entonces el gobierno lo que juzgase conveniente.

La conducta del Sr. (González) Ortega demostró a poco cuán fundados eran los motivos que tenía el gobierno para temer que abandonase a Zacatecas. Lo que sí no pudo el gobierno prever entonces, es que el Sr. Ortega fuese después a permanecer voluntariamente durante la guerra en el exterior, queriendo conservar los títulos de Presidente de la Corte y de gobernador de Zacatecas en Nueva York.

Al principio de su manifiesto y al tratar luego de la comisión que envió al Saltillo, quiso hacer también al que suscribe dos imputaciones personales. Sería indigno ocuparme aquí de mi persona, que es de ningún interés ante los objetos de los dos decretos. Nada más porque con el fin de atacarlos hizo el Sr. (González) Ortega tales imputaciones, me permitiré decir unas breves palabras.

Consistió la primera imputación en decir que no era extraño hubiese yo firmado como ministro los decretos, por haber sido antes "una

de las personas que cooperaron al golpe de estado de Comonfort". Pocos días después de haberlo dado el Sr. Comonfort conoció su error. Puso en libertad al Presidente de la Corte para que se encargase del gobierno y se batió con las fuerzas que querían ir a la reacción. No habiendo podido vencerlas, se retiró al extranjero y después dio su vida por la patria, muriendo honrosamente en defensa de la independencia contra el invasor. Muy lejos de que yo cooperase en nada a aquel golpe de estado, contribuí eficazmente, por mis buenas relaciones con el Sr. Comonfort, para que retrocediese de sus primeros pasos. Lo supieron bien cuantos podían conocer entonces mis acciones y sin duda ha debido estar hace tiempo satisfecho de ello el Presidente de la República, pues se ha servido llamarme varias veces a su ministerio. También debió estar satisfecho de ello el Congreso nacional, que me honró nombrándome diversas veces su presidente, como lo era en 31 de mayo de 1863, al cerrarse sus últimas sesiones.

La segunda imputación fue, que he contribuido a la expedición de los decretos, por "el deseo de afirmar el empleo de ministro". Lo fui hace nueve años y probé después que no me había quedado mucha voluntad de volver a serlo. Me excusé cuando el Sr. Comonfort me llamó otra vez y seguramente el Sr. (González) Ortega leería, en los periódicos del año de 1861, que me excusé también en dos diversas ocasiones que el actual Presidente de la República se sirvió llamarme. Fue público en San Luis (Potosí) que, habiéndome excusado por varios días, entré después al ministerio, por no creer que me podía rehusar en las circunstancias. No quise ser ministro en México, donde este cargo podía tener alguna retribución y algunos halagos; pero sin la una ni los otros, he considerado honroso serlo desde San Luis (Potosí) hasta el Paso del Norte, en las horas de conflicto de la patria. Ya que el Sr. Ortega quiso atribuirme algún apego al cargo de ministro, pudo advertir que me excusé de serlo en el tiempo de prosperidad y que he admitido serlo en el tiempo de desgracia.

Cuando el gobierno venía de Monterrey a Chihuahua, hallándose en la hacienda de Santa Rosa, del estado de Durango, puso a las órdenes del Sr. Gral. (González) Ortega la división que terminó por el desastre de

Majoma. Refiriéndose a esto, ha dicho en el manifiesto que por una segunda mira del gobierno se le dio el mando de aquel cuerpo de ejército, "para que su disolución, que era casi inevitable, tuviera lugar en sus manos". Dijo también que, con igual segunda mira, fui yo "el partidario más firme que tenía en el gabinete al tratarse de su nombramiento". Agregó que "se le dieron facultades extraordinarias para proporcionarse recursos, pero con la restricción de obrar en este punto de acuerdo con el Gral. Patoni".

Para confiarle el mando de aquellas fuerzas, se tuvo la razón muy natural de que él había traído de Zacatecas una parte de ellas. Debiendo el gobierno obrar prudentemente, conforme a las circunstancias, ha procurado siempre, según éstas lo aconsejasen en cada caso, aprovechar los elementos que estuvieran a su alcance. El otro único jefe que estaba allí, de graduación militar igual a la del Sr. (González) Ortega, era el ciudadano Gral. Miguel Negrete, encargado entonces del ministerio de la Guerra. De ningún modo habría sido prudente nombrarlo a él, porque existía entre ambos un profundo disgusto y se hacían recíprocamente muy graves cargos.

Ese disgusto fue el motivo que no explicó el Sr. (González) Ortega en su manifiesto, de que, como ha dicho, me escribiese durante el camino algunas cartas, que yo tuve necesidad de contestarle. No es exacto lo que refirió acerca de algunos conceptos de aquellas cartas, pero sí es cierto que, no queriendo dirigirse al ministro de Guerra, quiso espontáneamente dirigirse a mí con quien no tenía disgusto ninguno.

Nada tiene de exacto lo que ha dicho, sobre que se temiera entonces la pérdida de aquellas fuerzas, ni que parecieran malas las circunstancias, en aquel tiempo y en aquellos lugares. Muy al contrario, el Sr. (González) Ortega era el primero en ponderar la oportunidad y el probable buen éxito, de dirigir una expedición sobre la ciudad de Durango o de la de Zacatecas. Nombrado en Santa Rosa el 4 de septiembre de 1864 y ya en marcha con las fuerzas, escribió el día 8 al presidente, desde la hacienda de la Loma, una carta en que le decía:

La parte más avanzada del enemigo es Durango y, no obstante esto, tiene descubierta toda su retaguardia en una extensión de más de 100 leguas y su retaguardia es Zacatecas, sostenida sólo por 200 hombres que hay en aquella capital y otros 200 en el Fresnillo y a los que podemos atacar sin que pueda impedirlo Durango, a menos de que la guarnición, que hay en aquella ciudad, no abandone dicha población replegándose a Zacatecas, para impedir que esta capital caiga en nuestro poder. Nuestra situación es buena y el interior de la República va a conmoverse, o se ha conmovido ya, según me lo dicen de Zacatecas, con nuestra marcha.

Por la misma confianza y buen espíritu que manifestaba entonces el Sr. (González) Ortega, esperó el gobierno que hubiese cambiado la disposición anterior de su ánimo.

Con esta esperanza, no sólo le dio algunas facultades que antes no había creído oportuno conferirle, sino que para poner a su alcance cuantos elementos fueran posibles, le confirió amplias autorizaciones respecto de diversos estados, en que podían ser entonces más eficaces, esto es, en los de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis (Potosí) y parte del de Coahuila.

Para dar una prueba más de la inexactitud de todo lo que ha escrito el Sr. (González) Ortega, acompaño bajo los números 2, 3 y 4, copias de las autorizaciones que se le confirieron por este ministerio, luego que por el de Guerra se le nombró general en jefe de las fuerzas referidas. Se ve en esos documentos la grande amplitud de aquellas autorizaciones y se ve también, que lejos de ser exacto lo que supuso, acerca de una restricción para que en el punto de recursos debiera obrar de acuerdo con el Gral. Patoni, éste le quedó en todo subordinado.

El 21 del mismo septiembre se sufrió el desastre de Majoma. Sería inoportuno explicar aquí todo lo que ocurrió en aquella ocasión. El mismo Sr. (González) Ortega ha referido que las fuerzas se retiraron del combate íntegras y que en la noche de aquel día se disolvieron.

Como expresé al principio de esta circular, mi único objeto ha sido rectificar lo que el Sr. (González) Ortega ha dicho acerca de algunos actos públicos y oficiales. El gobierno podrá producir los datos de ellos y de todo lo demás que corresponda sobre lo que ha escrito el Sr. Ortega cuando, según lo dispuesto, se someta al juicio respectivo.

Le pareció poco combinar en el manifiesto cuantas imputaciones pudo sugerirle su imaginación, aunque a primera vista se palpase su falta de fundamento. No obstante haber acumulado imputaciones hasta sobre puntos muy nimios o del todo inconducentes, queriendo todavía dar a suponer que se reservaba otras, dijo: "¡Ojalá y pudiera revelarlo todo, esto pondría de manifiesto mi conducta y explicaría la de los Sres. Juárez y Lerdo de Tejada!" Sobre esta afectada reserva el gobierno sólo puede excitarlo y si estuviera en su mano lo compelería desde luego a que dijese cuanto más pueda ocurrirle, hasta que él mismo no creyera tener más que decir.

De todo se ocupó en el manifiesto menos de impugnar, si creía que le era posible, los fundamentos constitucionales de los dos decretos. Tampoco se ocupó de impugnar convenientemente lo expuesto en ellos, sobre las consideraciones que el gobierno juzgó oportuno tenerle, respecto de sus faltas anteriores, mientras no llegó hasta abandonar la causa de su patria yendo a permanecer durante la guerra en el exterior.

Para que el presidente cumpliera su sagrado deber de seguir sosteniendo la causa de la independencia contra el invasor, bastaba el decreto sobre la prórroga de sus funciones pero, al mismo tiempo, era ya un deber imperioso e imprescindible resolver sobre las responsabilidades del Sr. Gral. (González) Ortega, según lo que se expuso en el otro decreto relativo. No era posible mantener el peligro de que, si él quería seguir permaneciendo en el exterior, dejase de haber quien, en el caso de falta del Presidente de la República, pudiera sustituirlo.

Tampoco cabía en la conciencia del deber del gobierno dejar que pudiera llegarse a confiar la suerte de la nación, al que le había abandonado en el conflicto cuando así creyó convenirle y que podría volver a abandonarla cuando así le conviniese. No debería confiársele en tal caso, sino a alguno de los que dignamente han seguido defendiéndola

sin retraerse por las desgracias y sin calcular sus intereses personales, ni esperar mejores circunstancias.

Todos los que ejercen autoridad en nombre de la República y los jefes de las fuerzas que combaten por ella, de quienes tiene noticia el gobierno, han recibido los decretos considerándolos fundados y justos. A pesar de esto, el Sr. (González) Ortega se ha empeñado en llamarlos golpe de estado. Si lo fuera sería muy diverso de los conocidos. Sería un golpe de estado para conservar el poder tan sólo en la época de desgracia y dejarlo en cuanto ella terminase.

Ha demostrado el Presidente, por algunos años, que tiene toda la energía y la constancia necesaria en el tiempo de peligros y sacrificios, sin que cuando ha llegado un tiempo mejor pensase en procurar sus intereses personales.

Se vio ya en 1861 que tan luego como terminó la revolución o, más bien, desde algunos días antes, convocó al pueblo en cuanto lo creyó posible para que eligiese a quien quisiera confiarle sus destinos. Ahora ha dicho que hará lo mismo y sabrá del mismo modo cumplirlo. Siempre ha creído el presidente que su mejor título y su mejor aspiración, es someterse fielmente en todos sus actos a la voluntad

Independencia y Libertad, Paso del Norte, abril 30 de 1866.

(Sebastián) Lerdo de Tejada

ZARCO, FIEL AMIGO DE JUÁREZ

Nueva York, abril 7 de 1866

Sr. don Benito Juárez

Mi muy querido amigo:

Recibí la grata de usted del 2 de marzo. Nada tiene usted que agradecerme por los apuntes biográficos pues no he hecho más que cumplir con el deber de mexicano y de amigo de usted que conoce y estima todas sus virtudes.

¡Ojalá y algo pudiera yo hacer en favor de nuestra patria! Bien me pesa no poder servirle de nada, pues apenas voy logrando que la prensa sudamericana siga ocupándose de nuestra suerte y al enviarle revistas de lo que pasa en este país hablo siempre de México.

Mucho me alegro de que regrese usted a Chihuahua y de que cuenta también con el estado de Durango.

Mientras más escriba (González) Ortega más se desconceptuará. Su último cuaderno ha producido ese efecto y no debe estar muy orgulloso de las gentes que componen su partido que puede dividirse en bandidos como Quezada y en locos como Prieto. Supongo que habrá usted visto las respuestas que dimos aquí a Ortega, cuando se sirvió declararnos diputados. Entiendo que Romero está arreglando la publicación de todo esto.

El último correo de México hace ver que en todas nuestras fuerzas prevalece el mejor sentido. Se confirman las noticias de algunos triunfos de nuestras armas.

Me parece que haría buen efecto que el gobierno de México formulase una enérgica protesta contra el envío de soldados austriacos y

belgas a sostener a Maximiliano y que la comunicase al gobierno americano. Esos alistamientos son muy impopulares en los países en que se hacen y tal vez cesarían del todo, si se temiese que causarían dificultades con los Estados Unidos.

Aquí parece que las cosas siguen bien, particularmente en lo relativo al empréstito.

Consérvese usted bueno y reciba el afecto de un amigo y servidor.

Francisco Zarco

GONZÁLEZ ORTEGA EN NUEVA YORK

Nueva York, abril 29 de 1866

Sr. Gral. don Miguel Negrete
Brownsville

Mi apreciable amigo y compañero:

He recibido la estimada de usted de nueve del corriente y con ella los pliegos que se sirve acompañarme. Supongo que habrá usted recibido las mías y los impresos que le he remitido para que los hiciera circular. Es imposible decirle a usted, por medio de una carta, lo que he hecho, lo que pienso hacer y lo que van a hacer muchos de los estados de la República. Bástame decirle que la causa de la ley se salvará y muy pronto.

Chihuahua ha sido tomado por Terrazas. Don Benito escribe de El Paso del Norte que todavía no piensa irse para la ciudad de Chihuahua. Esto significa algo.

Supongo que habrá visto usted ya los periódicos y en ellos publicada toda la correspondencia diplomática. El imperio de México acabó y sólo quedan grandes cuestiones qué resolver. Aprovechese usted de estas circunstancias y trabaje en Matamoros; ésta es la oportunidad de hacerlo todo. Aproveche usted las primeras impresiones que va a producir la noticia de la retirada de los franceses y de que los Estados Unidos se oponen de una manera solemne y terminante a que vengan voluntarios austriacos a sostener el imperio de Maximiliano.

Si me escribe, ponga sus cartas con esta dirección:
N. 143 E. 8th. Street, New York City.

Estoy saliendo pero aquí serán recogidas y me las remitirán.

Recuerdos mil a los muchachos, lo mismo que a su apreciable familia.

Su amigo.

Jesús González Ortega

JUAN J. BAZ DA INFORMES VARIADOS A JUÁREZ

Washington, abril 26 de 1866

Sr. don Benito Juárez

Mi estimado amigo:

De todas partes nos han llegado magníficas noticias que nos tienen llenos de alegría. Desde febrero la causa de la patria se presenta llena de vida y triunfante y las victorias de Uruapan, de Mazatlán, del Parral, Santa Isabel, Ciudad de Hidalgo y Chihuahua, muestran al mundo cuán necia fue la pretensión de Napoleón de querer esclavizar al pueblo mexicano.

Al lado de estas espléndidas victorias los triunfos de la diplomacia se presentan y Mr. Seward obliga por fin a Napoleón a que saque las tropas de México. Aquel tirano finge que, movido de su propia voluntad, entra a la política de no intervención y que sacará su ejército en tres períodos que empezarán en noviembre de este año y concluirán en noviembre del año venidero. Esto es lo aparente, pero la realidad es que este término se abreviará y que dentro de un año no quedará un soldado francés en México.

Respecto de la Austria es Seward menos complaciente; Austria no es nación marítima y por consiguiente nada pueden temer de ella los Estados Unidos; Austria no tiene lazos particulares con esta nación; Austria tiene agotado su erario y está envuelta en dificultades y rodeada de enemigos, así es que por esto se decide Seward a hablarle alto y le dice claramente que no envíe un solo soldado a México; los Estados Unidos consideran este hecho como *casus belli*. Lo mismo se hace con la Bélgica.

Faltando a Maximiliano el apoyo de la bandera francesa, nadie en Europa le proporcionará recursos y, por consiguiente, dentro de un año estará reducido a lo que pueda sacar de las rentas del país y a cinco o seis mil soldados extranjeros y los que pueda levantar con los traidores. Estos últimos, viéndose perdidos, empezarán a voltear cosas y a traicionar a Maximiliano y este desgraciado saldrá del país a chiflidos.

En medio de esta perspectiva feliz hay una nube en el horizonte, nube que el gobierno puede disipar, pero para hacerlo necesita salir de esa indolencia que constituye la esencia del carácter mexicano y que nos hace ver con indiferencia las cosas que juzgamos pequeñas. La nube en donde está el peligro es el círculo de (González) Ortega; todo el mundo sabe lo que es éste y lo que vale, y si uno se fuera a atener a éste de seguro lo miraría con desprecio; sin embargo, es necesario tener presente que así como Negrete, que era su enemigo, se ha vuelto su partidario por satisfacer sus pasiones y rencores, así todos los picaros —que abundan— cuyas miras e intereses se encuentren contrariados por el gobierno tomarán parte con él.

Yo estoy muy lejos de aconsejar que se entre en una carrera de sangre, pero sí creo que el gobierno debe manifestarse enérgico respecto de los que abiertamente lo han desconocido y que sabe que están resueltos a entrar al país para promover la discordia civil. Huerta, Patoni, Poucel, Quezada, Negrete, Aureliano Rivera y otros, están resueltos a rebelarse contra el gobierno y a entrar en campaña; es, pues, preciso que el gobierno tome las medidas más eficaces para impedirlos; debe dárseles de baja haciéndose saber esto a toda la nación y debe darse órdenes a todos los jefes de fuerzas y gobierno de Estado para que los aseguren y les impidan internarse al país.

Como prueba de que se mueven, diré a usted que en Morelia han estado ya Lalan y otro oficial queriendo seducir la fuerza de Régules para que se declararan por (González) Ortega y Régules ha tenido que amenazarlos de ser fusilados si ponían en juego sus maquinaciones. Al mismo Morelia va, por el buqué que salió ayer de Nueva York, un tal López, dependiente de Huerta, con el intento de seducir a los jefes de

Morelia para que desconozcan al gobierno; el mismo Huerta piensa irse luego que las cosas estén dispuestas.

Vega escribió a L. Cuevas que consultase a Huerta y a Berriozábal si obedecía la orden del gobierno que le quitaba la comisión que tenía; Huerta le contestó que no obedeciera y Berriozábal que sí, pero como su interés está por no obedecer es claro que así lo hará y que ahora estará dispuesto a pasarse con (González) Ortega.

Aureliano Rivera está ya en una fuerza que anda por Zacatecas y ha escrito a Negrete que se vaya con él y esto demuestra que allí piensan formar un núcleo de resistencia al gobierno.

Ya he escrito a Morelia por diversos conductos para contrariar las maniobras de Huerta y trabajamos aquí, con Treviño y Guadalupe García, para asegurar la frontera; algunas comunicaciones de Huerta para los paniagudos han sido interceptadas.

Pero si el gobierno no toma medidas violentas, acertadas y enérgicas, algún escándalo serio va a tener lugar y, sobre causar complicaciones y dificultades allá, nos traerá descrédito y desprecio aquí y en Europa; por lo mismo yo ruego a usted vea este negocio con grande atención y obre con violencia.

Dije a usted en mi anterior que Régules no debe ser removido del mando político y militar de Morelia, porque esto en lugar de traer ventajas y evitar el mal lo precipitaría; pero creo que usted debe darle órdenes terminantes sobre Huerta y escribirle cartas particulares que lo halaguen y lo comprometan.

Patoni va a marcharse de Nueva York o se ha marchado ya, no sabemos para dónde, pero es claro que es ya su marcha en realización del plan que se hayan propuesto.

No incluyo a usted impresos en donde constan las notas de Seward, porque lo hace Romero.

La familia de usted está en perfecta salud.

Salúdeme usted a los amigos y mande a su servidor.

Juan J. Baz

HUERTA INVITA A NEGRETE A LUCHAR CONTRA JUÁREZ

Nueva York, abril 22 de 1866

Sr. Gral. don Miguel Negrete
México³

Muy querido amigo y compañero:

Por sus muy estimadas letras de 19 de marzo, he sabido que usted me ha favorecido con haberme dirigido dos veces sus apreciables recuerdos. Yo siento sobremanera que un extravío me haya privado de la satisfacción de saber de usted y ahora comprendo por qué también mis letras no han llegado a su poder.

El Sr. coronel Quezada me hizo favor de llevar varias cartas para algunos amigos y una de ellas era para usted. Después volví a escribirle a usted al Presidio del Norte, dirigiéndole un saludo afectuoso y manifestándole lo extraño que me parecía su silencio. En esta vez y en la primera, carecí siempre de su apreciable respuesta.

Este intervalo de incomunicación nos ha privado de comunicarnos algunas noticias tan esenciales en la situación que atravesamos. Ahora me alegro de poder decirle a usted algunas cosas.

La situación de nuestro país entre este pueblo es muy buena, las simpatías y los deseos de salvarnos existen hasta en los pueblos más humildes de los Estados Unidos; mas el gobierno se ha trazado una línea de conducta que si bien nos es propicia y eficaz a los republicanos, sus resultados (no) nos favorecerán más tarde, por llevar su lento desarrollo

³ El Gral. Huerta, acaso por inercia, rotuló así la carta, pues sabía que el Gral. Negrete estaba en Brownsville.

por guía a la prudencia, que es tan natural en las grandes cuestiones diplomáticas.

Sin embargo, el desenlace de la cuestión de México siempre será bueno y honroso para la causa de la independencia.

Respecto de la cuestión presidencial le diré a usted que han venido varios comisionados de los Estados del interior a manifestar al Sr. González Ortega la necesidad que tienen de ver establecido en el país al gobierno legal. Esta petición y otras mil circunstancias imperiosas, hacen que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia vaya a México a establecer el Poder Ejecutivo que aún conserva don Benito Juárez, por haberse tolerado su existencia ilegal en atención a las comprometidas circunstancias que nos rodean.

Don Plácido Vega está bien y nos ayudará a sostener la ley contribuyendo, con sus servicios en occidente, al aniquilamiento de la arbitrariedad juarista. Los demás jefes de ese rumbo seguirán la bandera que tan heroicamente han sostenido agregando, a las glorias de sus armas, el brillo del respeto y de su obediencia a los preceptos constitucionales.

Con tales cooperadores restableceremos el imperio de la ley y marcharemos con firmeza, auxiliados del inmejorable resultado de los negocios pendientes en este país en favor de la salvación de México. Muy pronto iré con el Sr. González Ortega y entonces tendré el gusto de darle a usted un estrecho abrazo; mientras esto suceda, alegrémonos con ver remediado, en lo posible, el malestar que nos ha traído el juarismo y principalmente sus comisionados en este país. Varios negocios emprendieron y en todos fracasaron, causándonos con sus torpezas grave mal. Afortunadamente acabó todo y, además de haber sido el juguete de estas gentes, sacaron desengaños y desprestigio.

A última hora he visto en los diarios que Napoleón celebró un tratado con Maximiliano para evacuar las tropas francesas de México. En los meses de noviembre pasado, marzo del año que entra y noviembre del mismo, son las épocas fijadas para quedar libres del ejército francés. ¡Dios lo haga!

Tenga usted la bondad de poner la adjunta en manos de mi compañero Hinojosa y cuando tenga a bien contestarme, con la dirección siguiente H.D'ouville N° 717, Broadway, pueden dirigirme sus apreciables letras, donde las recibirá con seguridad su afectísimo amigo y compañero que le desea mil felicidades y besa su mano.

Epitacio Huerta